

DOCUMENTO POLÍTICO. ANEXO 1

Daniel Castillo Hidalgo
(Profesor de Historia Económica ULPGC)

Breve
recorrido
sobre la
Historia
económica
y social de
Canarias

PODEMOS,
en plural

Mayo 2017.
PODEMOS, en plural.

Documento político. Anexo 1.

Breve recorrido sobre la Historia económica y social de Canarias, por Daniel Castillo Hidalgo (Profesor de Historia Económica de la ULPGC)

@podemosenplural
www.podemosenplural.com

Breve recorrido sobre la Historia económica y social de Canarias.

La historia económica contemporánea en el archipiélago canario se caracteriza por su mayor integración en las dinámicas de la globalización, pero en una situación de dependencia periférica. Entre algunos de los principales elementos que caracterizan esta situación dependiente, pueden señalarse los escasos recursos naturales disponibles, la fragmentación del territorio, la debilidad de los capitales insulares y en resumen, una tardía modernización de la economía que ocasionó importantes efectos de arrastre sobre el conjunto de la estructura socio-económica isleña. Es bien conocida la descripción de la historia económica insular a través de distintos ciclos fundamentados en sectores exportadores, de carácter esencialmente agrícola hasta la irrupción del turismo de masas en la década de 1960. Una descripción que presenta una estructura económica de carácter extravertido y fuertes debilidades estructurales, especialmente en lo relativo a la competencia de las producciones regionales en los mercados internacionales y la imposibilidad de un crecimiento agrario-industrial sostenido en las producciones de escala. Los grandes ciclos históricos representados por la producción y exportaciones de monocultivos como el azúcar, vino, orchilla, cochinilla, plátanos y tomates han padecido enormes dificultades que se vinculan –entre otros factores- a la existencia de productos alternativos a nivel internacional con costes de producción más bajos y rentables en los grandes mercados europeos.

Si bien se puede hablar de una economía dual, donde los cultivos de subsistencia convivían con esta agricultura de tipo exportador, la progresiva integración internacional de la economía suponía importantes crisis socio-económicas en Canarias durante los ciclos depresivos. Con el declive de cada ciclo exportador, las Islas Canarias se sumaban en un periodo de crisis económica profunda, afectando esencialmente a las condiciones de vida de las clases populares. Estas crisis incentivaron por otra parte la reconversión de las estructuras productivas isleñas y la búsqueda de nuevos sectores de tipo agro-exportador. Con una propiedad del capital concentrada (incluyendo tierras y aguas), este proceso fue de forma general organizado desde el poder económico, sin que se produjera un empoderamiento del campesinado en la búsqueda de incentivos a la producción.

De este modo, la oligarquía insular, adaptó sus actividades económicas a las demandas del comercio exterior, hecho especialmente importante en el siglo XIX, favorecidos por el impulso liberal internacional. Las políticas librecambistas y la situación geoestratégica del archipiélago generaron el crecimiento de la economía canaria en la segunda mitad de la centuria. Un crecimiento sostenido en la inversión foránea (esencialmente británica) y la colusión de intereses entre la oligarquía insular y los capitalistas europeos. Buen ejemplo de ello puede encontrarse en la difusión del cultivo del tomate y posteriormente el plátano en las islas, que sirvió como moneda de cambio frente a las importaciones carboneras que suponían además una interesante entrada de divisas en para la débil economía isleña.

El patrimonio de las élites económicas ha ido configurándose bajo criterios de endogamia, concentrándose en un grupo relativamente reducido de familias poseedoras de tierras y aguas (aguatenientes) procedentes de los primeros repartimientos desarrollados durante la conquista por parte de Castilla en el XV. Nobles, oficiales y soldados que participaron en la guerra de conquista fueron beneficiados de estos repartos de tierras y aguas, amparados por la Corona. Las políticas matrimoniales para incrementar la concentración patrimonial se desarrollaron regularmente en las Islas. La Iglesia Católica resultó también beneficiada en este proceso, mediante las donaciones y regalías. Si bien es cierto que el porcentaje de esta élite económica se ha ampliado de forma relativa a lo largo de los siglos, no debe obviarse el incremento en la concentración de patrimonios que se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la revalorización internacional de las Islas.

La situación crítica de las Islas, tras la caída del ciclo exportador de la cochinilla y las epidemias de cólera que azotaron a una población hambrienta y débil, obtuvo la respuesta institucional estatal a través de la concesión de franquicias comerciales en 1852. Esto reforzaba las bases fiscales insulares, caracterizadas por una relativa laxitud cuyo objetivo era fijar a la población al territorio. Sin posibilidades reales de industrialización, las Islas debían volcarse en la prestación de servicios comerciales a la navegación

internacional, que en ese momento se encontraba en plena expansión. La creación de fletes de retorno atractivos para la flota mercante europea que operaba en África y América del Sur se convirtió en el objetivo a alcanzar por parte de las élites económicas isleñas.

El marco institucional debía ser un elemento de refuerzo de la economía local, atrayendo capitales exteriores en un momento de cambio estructural a nivel mundial. El impacto de esta medida se retrasó durante varias décadas, debido a la escasez de inversiones en infraestructuras por parte del gobierno español, que definía a las Islas en sus anuarios estadísticos dentro de la categoría de “comercio exterior” durante este periodo. En la década de 1880, Canarias entra de lleno en los flujos comerciales de la Globalización en un contexto de expansión imperialista en el continente africano. El capital británico que lideraba este proceso encontró en las Islas un lugar ideal para el desarrollo de actividades económicas (navegación, banca, comercio), convirtiendo a los puertos canarios en plataformas de lanzamiento para la conquista y control de los mercados africanos. La baja fiscalidad (sin transferencia de rentas en forma de servicios públicos), la cooperación necesaria de la oligarquía local (instalada en las instituciones políticas) con los capitalistas europeos y su posición geográfica impulsaron la llegada masiva de capitales hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Las ciudades aumentaron su tamaño al ritmo de un crecimiento demográfico sostenido que se fundamentó en una leve mejora de las condiciones alimenticias provocada por la llegada por vía marítima de una mayor cantidad de productos de ultramar. Esta leve mejoría frenó las epidemias de cólera que habían devastado a la población durante la primera mitad del siglo XIX, aunque se experimentaron brotes importantes en los barrios populares de las Islas, como la epidemia que asoló los riscos de Las Palmas de Gran Canaria en la primera década del siglo XX. Durante la epidemia de tifus de 1909-1910, el Ayuntamiento de la ciudad tuvo que financiar los ataúdes y entierros de los muchos niños de familias pobres de San José que sucumbieron a la enfermedad. No obstante, durante esta fase de crecimiento económico, las ciudades mejoraron sus redes de servicios urbanos básicos, como electricidad, suministro de aguas o planes de saneamiento adecuados, financiados también con capital foráneo. Estos avances en la mejora de las infraestructuras se circunscribían esencialmente a los distritos comerciales y residenciales de las clases adineradas, pero también las incipientes clases medias vinculadas a actividades liberales. La inmensa mayoría de la población, no se benefició durante esta fase de los avances de la modernidad.

El proceso de crecimiento económico durante esta etapa es indiscutible, así como la mayor dependencia del exterior, tanto a nivel de posibles mercados como de distribución de la inversión. Sin unas políticas de redistribución de la riqueza a nivel institucional, este crecimiento económico no podía de ningún modo

suponer un reparto equilibrado de la riqueza. En este sentido, Canarias se situaba en la línea general de la mayor parte de regiones españolas en ese contexto histórico. El siglo XIX representa un siglo de progreso tecnológico y de desigualdad económica y social de enormes dimensiones. Un buen ejemplo de ello se encuentra en las tasas de analfabetismo y en la situación social de la mujer, doblemente discriminada bajo el amparo de unas instituciones formales e informales de fuerte carácter patriarcal. Por lo tanto, podrían matizarse algunos aspectos relativos a esta “edad dorada” de la Historia isleña, presentada tradicionalmente por la historiografía como una época de éxito y despegue socio-económico. Un ejemplo de elementos que señalan las dificultades económicas insulares se encuentra en el crecimiento de los procesos migratorios hacia Cuba, Venezuela y otros países de América del Sur, que demandaban mano de obra barata que reemplazara al extinto sistema esclavista. El crecimiento demográfico isleño, el hambre de tierras (ante la escasa productividad y los modos extensivos de producción) y la caída relativa de los salarios se encuentran detrás de esta tendencia migratoria. Los canarios viajaron en condiciones muy complejas hacia estos destinos agrarios, y bajo distintas formas de migración: estacional, larga duración y permanente.

La desigualdad económica se incrementó de forma notable en la medida en que los propietarios del capital veían crecer la rentabilidad de sus inversiones frente a unas rentas del trabajo estancadas. Un proceso que favoreció una mayor concentración de los patrimonios, fortalecido además por las desamortizaciones eclesiásticas desarrolladas en el siglo XIX. Las relaciones laborales experimentaron cambios notables en los sectores urbanos más dinámicos, permaneciendo por otra parte elementos clientelares –e incluso serviles– en el sector primario, vinculados al caciquismo y al poder económico de las élites regionales.

Dependencia externa y desigualdad. Estos factores quedaron evidenciados durante la Primera Guerra Mundial, que preconizaba el periodo crítico que se iba a desarrollar en las islas durante las siguientes décadas. El aislamiento del archipiélago durante el conflicto agravó las contradicciones internas de la estructura económica insular, quebrando las bases del modelo exportador. Una situación que comenzó a revertirse de forma moderada en la década de 1920, con una recuperación modesta de la actividad agrícola. El proceso de división provincial del Archipiélago (1927) responde en buena medida al interés por parte de las oligarquías de reforzar sus redes clientelares regionales, debilitando –si era necesario– a posibles competidores comerciales en otras islas. A ello se añadió la caída relativa de Gran Bretaña como país emisor de capitales, que debilitó también las bases fundamentales que habían sostenido el ciclo de crecimiento anterior.

Finalmente, la década de 1930 se caracteriza en su primera mitad por la tardía difusión de la crisis financiera internacional pero que supuso una nueva

contracción de la actividad económica en Canarias, dada la debilidad económica en la que se encontraban algunos de los principales mercados isleños. Pese a la relativa pérdida de peso de Gran Bretaña, la crisis industrial europea generó poderosos efectos de arrastre sobre la economía de las colonias y territorios dependientes. Las Islas Canarias, integradas en las redes comerciales internacionales experimentó los problemas asociados a la descapitalización de las compañías comerciales imperiales, como por ejemplo Elder Dempster, principal transportista en África Occidental que estuvo a punto de sucumbir ante los efectos de la crisis económica. Si el capital internacional se deprimía, las consecuencias sobre la economía isleña se harían evidentes. La conflictividad social se incrementó de forma importante, especialmente en las ciudades donde las condiciones de vida empeoraron de forma radical. La dependencia del exterior se tradujo en una caída generalizada de las exportaciones y la pérdida de poder adquisitivo por parte de la mayor parte de la población. A ello se añadió el encarecimiento de las importaciones que se tradujo en una crisis social que pretendió vincularse –al menos por la propaganda y sistema educativo durante el franquismo- a la proclamación de la Segunda República.

Los efectos positivos que podían generarse por la recuperación de la economía internacional en la segunda mitad de la década fue abortada en las islas tras el fracasado golpe de Estado de julio de 1936 y los tres años consiguientes de conflicto armado en España, que volvieron a situar al archipiélago en una situación de crisis económica extrema. El estallido de la Segunda Guerra Mundial alargó la agonía socio-económica insular, con un sector agro-exportador paralizado. Una década caracterizada por una economía cuartelera organizada por los oficiales del ejército siguiendo los parámetros del corporativismo fascista italiano. Las bases institucionales del despegue decimonónico en lo que se referían a la apertura internacional habían sido suprimidas durante una década, bloqueando el funcionamiento básico de la economía. La contracción de la economía canaria fue evidente, generándose una mayor desigualdad socio-económica. Sin embargo, la puesta en práctica del modelo institucional durante el franquismo no supusieron un cambio estructural en la distribución de rentas durante este periodo, manteniendo –e incluso reforzando- las redes clientelares existentes durante los casi cuarenta años de dictadura. La pobreza, el hambre y la escasez que propiciaba el modelo autárquico franquista impactaron con mayor dureza sobre las clases populares isleñas. Por su parte, la oligarquía seguía disfrutando de posiciones de privilegio en las instituciones, sirviendo como correa de transmisión al régimen. Debe indicarse que algunos sectores de actividad se recuperaron más rápidamente que otros. Por ejemplo, los puertos recuperaron indicadores de actividad previos a 1936 hacia 1946-1948, entrando en una nueva fase expansiva a comienzos de la década de 1950 con el crecimiento de sectores como la pesca y las industrias de conservas capturadas en el banco sahariano. Esta re-integración

de Canarias en los flujos comerciales internacionales a partir de 1946 elevó de forma moderada la situación socio-económica insular, diferenciándose de lo que estaba sucediendo en territorio peninsular.

Durante todo este periodo de tiempo, el peso del sector primario seguía siendo predominante, y esto explica también la supervivencia de las estructuras de tipo clientelar en las islas. Esta estructura comenzó a variar en la década de 1960 a través de la relativa apertura económica del régimen franquista. Nuevos sectores de actividad estaban consagrados a liderar el crecimiento económico extraordinario de la economía española –y canaria- en las siguientes décadas. El turismo de masas y la construcción de infraestructuras hoteleras pusieron los cimientos de un modelo económico con un carácter fuertemente especulativo. El impulso demográfico sostenido desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial –a escala internacional- ha marcado a la industria de la construcción (viviendas e infraestructuras) como uno de los sectores más importantes que influyen en el crecimiento económico moderno. Una actividad depredadora de suelo y recursos naturales, que requiere además la participación decisiva del sector financiero. Además, en el caso canario se desarrolló un tímido proceso de industrialización (conservas de pescado, elaboración de tabaco) que implicó una importante concentración de mano de obra.

Sin embargo, la industria de la construcción (con todas las actividades complementarias que se vinculan a ella) y el turismo fueron los ejes del “cambio revolucionario” de la economía insular. La oligarquía canaria contaba con una parte importante del capital (territorio) y era necesario alinearse con otros capitalistas e inversores externos (españoles o extranjeros) que aportaran volúmenes importantes de inversión para la dotación de infraestructuras. La mejora en los medios de transporte aéreos (caída de precios, oferta de servicios), la relativa cercanía geográfica, las bondades del clima y la debilidad de la moneda española frente a otras divisas de potenciales países emisores de turistas (británicos, alemanes, holandeses, escandinavos) convertían a las Islas en una buena apuesta para el turismo de sol y playa. Los bajos costes salariales y la rápida rentabilidad de las inversiones acometidas concentraron el interés de las élites económicas insulares en estos sectores de actividad. La venta de suelo cercano al mar –y su alteración radical- para la construcción de infraestructuras hoteleras se convirtió en una forma fácil de incrementar las rentas de los terratenientes, así como un puente al incremento del patrimonio en forma de activos de las sociedades turísticas que desarrollarían la actividad. A medida que este tipo de turismo de masas crecía en importancia y se transfería mano de obra del sector primario al terciario, la industria de la construcción comenzó a adquirir una mayor relevancia al crecer la población urbana y la demanda de viviendas. Se asiste por lo tanto al crecimiento de las áreas metropolitanas y una progresiva despoblación del interior, dada la caída del sector primario en la distribución de la estructura

económica regional. El suelo potencialmente urbanizable se convirtió en herramienta económica de poder, al igual que las pugnas entre las administraciones públicas por su gestión. Si se analizan los casos de corrupción institucional en las Islas en las últimas décadas, la inmensa mayoría de casos se localizan en torno a esta cuestión, estableciéndose por lo tanto una correlación positiva entre gestión de suelo, corrupción política e intereses privados vinculados al sector de la construcción.

El binomio “turismo-construcción” ha caracterizado el crecimiento económico en Canarias durante las últimas décadas, fortaleciendo el peso del sector terciario (hostelería, restauración, servicios de gestión, etc.). Ambas actividades ofrecen una importante –y rápida- rentabilidad para las inversiones acometidas, en la misma medida en que la creación de valor añadido es muy baja. La estructura salarial (exceptuando fenómenos de burbujas especulativas como la desarrollada en la década de los 2000) es relativamente baja, al igual que las tasas de sindicación en estos sectores. Estos indicadores soportan la tesis de un desequilibrio evidente en las relaciones laborales, donde los casos de subcontratación y explotación de la mano de obra han sido puestos de manifiesto a través de distintos agentes sociales como las centrales sindicales. Por otra parte, este modelo económico sustentado en la llegada masiva de millones de personas cada año ejerce una presión insostenible sobre los recursos hídricos y energéticos de las Islas. La respuesta institucional ha optado tradicionalmente por el crecimiento de la oferta de agua (desalinización, depuración) y energía (importación de productos petrolíferos con efectos perniciosos sobre la balanza comercial regional) en lugar de buscar mecanismos para mejorar la oferta turística con el objetivo de reducir el número de visitantes, pero a su vez incrementando el gasto personal.

Además, el sector primario ha experimentado en estas últimas décadas un proceso de decadencia progresivo, con una contribución prácticamente irrelevante en el conjunto de la economía regional. La política agraria se ha centrado en la defensa de los sectores exportadores (plátanos y tomates) frente a las necesarias políticas de soberanía alimentaria que defienden instituciones mundiales como la FAO. Las políticas agrarias parecen haberse convertido en la última década en una especie de folklore cultural para el turismo en lugar de convertirse en motor de cambio para un modelo económico sostenible y cercano, que proporcione empleo y alimentos a la población local. Habiendo –aparentemente- renunciado a la producción de alimentos frente a un modelo especulativo que se beneficia de las coyunturas económicas externas, el consumidor promedio canario debería beneficiarse del Régimen Económico y Fiscal (REF) cuyo objetivo es relativizar los costes generales de la insularidad y la distancia frente al territorio peninsular. Sin embargo, se constata una disfunción en su desarrollo, observando indicadores como el elevado coste de la vida frente a los salarios, que se sitúan entre los más bajos de la Unión Europea. Y todo

ello, siendo una potencia turística mundial, recibiendo año tras año a más de doce millones de personas.

No debe pasarse por alto que el noventa por ciento (90%) de los bienes de consumo en los mercados locales son importados del exterior, lo que es un ejemplo evidente de dependencia externa. Algunas herramientas fiscales puestas en marcha para combatir las altas tasas de pobreza y desempleo (como la Reserva de Inversiones Canarias, R.I.C.) no han puesto remedio a algunos problemas de carácter estructural de la economía regional. Los Fondos Estructurales de Desarrollo Regional (FEDER) procedentes de la Unión Europea han paliado en parte la falta de inversiones en infraestructuras básicas desde la década de 1990, que han permitido la construcción de hospitales, centros educativos y otras infraestructuras de transporte como autovías.

Sin embargo, la brecha de la desigualdad no parece haberse reducido de forma importante, con enormes bolsas de pobreza, altas tasas de desempleo estructural y una escasa diversificación de la economía canaria. Los canarios han vuelto a coger la maleta en busca de oportunidades laborales, fundamentalmente en Europa. Una maleta que va cargada de conocimientos y formación superior alcanzada en centros educativos regionales que se pone a disposición de otros países en un proceso de “fuga de cerebros” propia de economías estancadas y con graves problemas estructurales. La pérdida constante de capital humano, así como el despilfarro de recursos públicos que se genera al perder a esa valiosa porción de la población son algunos de los efectos perniciosos que actúan como bloqueadores del desarrollo humano.

Las altas tasas de desempleo, las bajas rentas del trabajo, las limitadas transferencias públicas (calidad de los servicios públicos básicos) y otros indicadores de desarrollo humano señalan que la economía canaria adolece de unos problemas estructurales esenciales y de largo recorrido. Con un sector económico puntero a nivel mundial (turismo) y experimentando récord tras récord en la llegada de turistas, es inconcebible que esa riqueza generada no se distribuya de un modo equitativo, con el objetivo de reducir las elevadísimas tasas de desempleo que se traducen posteriormente en pobreza, marginalidad y desestructuración social. Recientes estudios científicos han demostrado cómo la marginalidad social y la pobreza estructural son elementos que se heredan y provocan importantes estragos sociales en el largo plazo. Esto genera una trampa de la pobreza que debería revertirse mediante una reforma institucional de profundo calado que podría modificar las bases históricas de funcionamiento de la economía canaria. Por lo tanto, parece evidente que la desigualdad económica en el Archipiélago sigue experimentando un proceso de expansión que incrementa la concentración de capital y patrimonio en un porcentaje cada vez más reducido de la población. Una trayectoria que contiene un fuerte carácter estructural, institucional e histórico pero que puede y debe revertirse a través de un proceso de cambio político y social.



PODEMOS,
en plural